

La pedagogía del bolsillo y el fin de la impunidad urbana

17/12/2025

Hay una lógica que durante décadas pareció grabada en el ADN de nuestra cultura urbana: la idea de que el espacio público es «tierra de nadie» y que, por extensión, sus daños son «cuenta del Estado». Sin embargo, los casos que hemos visto este año en San Rafael –desde la destrucción de parte del Paseo Pellegrini hasta el semáforo derribados en Independencia y Las Heras o un poste en avenida Los Sauces– nos obligan a analizar algo más profundo que un simple parte de daños. Estamos ante la implementación de una pedagogía del bolsillo, la única que parece ser efectiva cuando el respeto por lo común falla.

Históricamente, el mobiliario urbano fue tratado con un desprecio invisible. Un conductor perdía el control, se llevaba puesta una luminaria o destrozaba un bolardo, y la inercia del sistema hacía que ese costo se diluyera en el presupuesto general. Es decir, lo pagaba usted, lo pagaba yo y lo pagaba el vecino que jamás cometió una infracción. Esa era la lógica de la socialización de la irresponsabilidad.

Lo que estamos viendo ahora es un quiebre de esa lógica. Cuando el municipio tasa un daño en 8 millones de pesos y persigue ese cobro contra el patrimonio personal del infractor, no está simplemente buscando recuperar dinero. Está enviando un mensaje ético y jurídico: el patrimonio público tiene dueño, y ese dueño es la comunidad.

Esta nueva dinámica pone fin a la «licencia para destruir». El concepto de responsabilidad ciudadana deja de ser una frase romántica en un manual de educación cívica para convertirse en una carga civil concreta. La infraestructura –las luces LED que iluminan nuestras noches, los paseos donde caminan

nuestros hijos, los semáforos que ordenan nuestro caos— deja de ser un blanco gratuito para la impericia.

La «arrogancia del volante», exacerbada tantas veces por el alcohol o la velocidad, hoy tiene un precio de mercado. Y es un precio alto. Perseguir judicialmente a quien daña un paseo o un semáforo es, fundamentalmente, defender el esfuerzo del contribuyente. Es decirle al ciudadano que cumple que su dinero ya no se va a usar para subsidiar la imprudencia ajena.

En definitiva, la lógica ha cambiado. San Rafael ya no es el escenario donde se puede romper y huir. Hoy, la ciudad exige que cada uno se haga cargo de su huella en el espacio público. Porque entender que lo que es de todos debe ser cuidado por cada uno, no es solo una cuestión de leyes; es el cimiento básico de una sociedad que aspira a la madurez.